

# Lucha por la tierra y Reforma Agraria en el Brasil contemporáneo\*

*Luta pela terra e Reforma Agrária no Brasil contemporâneo*

*Struggle for land and Agrarian Reform in contemporary Brazil*

*Guillermo Alfredo Johnson\*\**

*Maria Gorete de Sousa\*\*\**

## **Resumen**

Las pertinaces relaciones coloniales y esclavistas que conformaron a Brasil persisten en la obstinada incrustación oligárquica que recurrentemente aflora en sus instituciones estatales. Modestos avances –quizás no en sus dimensiones sino en su eficacia para una Reforma Agraria gracias al trabajo de las organizaciones del campo– retroceden a tal punto que parecen volver siglos, al imperio de los latifundistas arraigados en el poder del Estado. Las políticas del gobierno ilegítimo de Michel Temer pretenden impugnar la Reforma Agraria, mientras que la rearticulación de los movimientos del campo la perciben cada vez más como indispensable.

*Palabras clave:* Reforma Agraria, movimientos sociales del campo, lucha por la tierra, Estado, Brasil.

## **Resumo**

As duradouras relações coloniais e escravocratas que formaram o Brasil perseveram na obstinada incrustação oligárquica que recorrente aflora com força nas suas instituições estatais. Modestos avanços –quiza não em suas dimensões, senão em sua eficácia para uma Reforma Agrária a partir das organizações do campo– vêm retrocedendo a tal ponto que parecem voltar séculos, ao império dos latifundiários arraigados ao poder do Estado. As políticas do governo ilegítimo de Michel Temer pretendem impugnar a Reforma Agrária, enquanto que a rearticulação dos movimentos do campo a percebem como cada vez mais indispensável.

*Palavras chave:* Reforma Agrária, movimentos sociais do campo, luta pela terra, Estado, Brasil.

\* El trabajo se benefició de las importantes sugerencias y contribuciones de los dictámenes anónimos de la revista *Estudios Latinoamericanos*.

\*\* Doctor en Sociología Política. Docente e investigador de Ciencias Sociales y del Posgrado en Sociología y en Geografía de la Universidad Federal de Grande Dourados, Brasil. Email: <guijohnson@uol.com.br>.

\*\*\* Doctoranda en Estudios Sociales Agrarios por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Militante del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra y educadora de la Escuela Nacional Florestan Fernandes, Brasil. Email: <sousa.mariagorete@gmail.com>.

**Abstract**

The tireless colonial and slave relations of Brazil persist in the obstinate oligarchic encrustation that recurrently emerges in its state institutions. Modest advances, perhaps not in its dimensions, but in its effectiveness for an Agrarian Reform from the countryside organizations, are regressing to such point that they seem to return centuries, to the empire of the landowners' rooted in the State power. The policies of the illegitimate government of Michel Temer pretend to impugn the Agrarian Reform, whereas the rearticulation of the countryside movements perceives it as more and more vital.

*Keywords:* Agrarian Reform, social movements in the country, struggle for land, State, Brasil.

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS, NUEVA ÉPOCA, NÚM. 42, JULIO-DICIEMBRE, 2018, PP. 117-135.

La historia de Brasil está marcada por sus relaciones coloniales y esclavistas, mismas que se prolongaron hasta la última década del siglo XIX, extendiéndose el legado oligárquico y su relación con el poder estatal hasta avanzando el siglo XX. El patrón de relaciones patriarcales y patrimonialistas originario de esa herencia coincide con la fase imperialista tomando forma en la perenne desigualdad de la apropiación de la tierra y de la riqueza. Esta abismal disparidad en la tenencia de la tierra no ha dejado otra opción a campesinos, indígenas y quilombolas<sup>1</sup> que luchan incansablemente por sus territorios. La saña predatoria que caracterizó el proceso colonial prosigue en su faz moderna a través del papel extractivista<sup>2</sup> que orienta la mayor parte del tiempo a la economía brasileña.

La lucha por la tierra, por la Reforma Agraria, es indisociable de la lucha por el poder estatal. En diversos momentos del siglo XX, el conflicto por la tenencia de la tierra implicó intensos enfrentamientos políticos. Sólo para citar someramente un episodio de esa pugna, recordemos que entre los años 1963 y 1964 el gobierno de Jango (João Goulart) propuso una serie de Reformas de Base, entre las que destacaba la necesidad de realizar una Reforma Agraria. La reacción de los sectores económicamente dominantes a lo que consideraron una amenaza fue la organización de un golpe militar, sirviéndose de la acusación de que se buscaba el comunismo. Una dictadura cívico-militar que se instaló por veintiún años alejó de ese desafío a los sectores históricamente dominantes: las oligarquías rurales. La perennidad y los arreglos coyunturales de esas relaciones de poder se revelan al considerar el papel asignado a Brasil –conjuntamente con los países latinoamericanos y caribeños– en el sistema internacional, dirigido al suministro de materias primas, confiriendo al Estado un papel central en la elaboración e implementación de políticas que inciden significativamente en la ocupación de la tierra y en la apropiación de sus productos.

<sup>1</sup> Decidimos mantener la denominación utilizada en Brasil para las comunidades que en general se designan como cimarrones, al referirse a las sociedades negras remanentes de la esclavitud.

<sup>2</sup> Al referirnos al extractivismo estamos incluyendo actividades relacionadas con la agropecuaria, la minería, la extracción de petróleo y sus derivados, y la explotación forestal, como formas predominantes.

Las adaptaciones que la acumulación capitalista mundial realiza para su reproducción, implicaron para América Latina que, desde los setenta del siglo xx, las directrices de la política estatal se encauzaran por la concepción neoliberal,<sup>3</sup> la cual puede ser resumida por una creciente mercantilización del acceso a los bienes sociales, justificada oficialmente por la necesidad de un permanente ajuste fiscal. De diversas maneras y con intensidad variable, la concepción neoliberal se fue aplicando en los países latinoamericanos dentro de la división internacional del trabajo, generando procesos de desindustrialización y de creciente reprimarización de sus exportaciones (Arceo, 2006; Martins, 2017). En ese contexto, la modernización en el campo introduce una nueva dimensión del monocultivo, dirigida por las transnacionales que controlan las semillas genéticamente modificadas, la mecanización-informatización y una intensa concentración de la tierra. En el transcurso de las últimas décadas del siglo pasado se consolida el agronegocio,<sup>4</sup> actividad agrícola con las características señaladas anteriormente, vinculado al comercio y a las finanzas internacionales, incentivadas por una diversidad de mecanismos políticos y económicos que permiten su reproducción y fortalecimiento (Oliveira, 2007).

Las concepciones predominantes que defendían la necesidad de una Reforma Agraria, hasta los ochenta, giraban en torno a la baja productividad de la tierra del modelo latifundista y la consecuente desigualdad social. A partir de la década de los noventa, otros movimientos sociales que fueron consolidándose –como los quilombolas e indígenas– incorporaron el argumento de la lucha por sus territorios tradicionales, al mismo tiempo que se sumaron a la disputa las banderas medioambientales y la búsqueda por la concreción de un modelo alternativo de producción de alimentos inspirado en la soberanía alimentaria (Bruno, 2016; Martins, 1981). La lucha por la Reforma Agraria convoca a un gran número de organizaciones, entre las que se pueden contar partidos de izquierda y centro-izquierda, que regularmente apoyan las acciones de los movimientos sociales y de las organizaciones sindicales de trabajadores rurales. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) se destaca por su organización y activismo, realizando actos públicos, campamentos y asentamientos con presencia destacada en el escenario político brasileño. Otros movimientos sociales

<sup>3</sup> Para más detalles sobre la concepción neoliberal de Estado pueden consultarse, entre otros, Harvey (2008), Jessop (2015), Puello-Socarrás y Guntúriz (2013).

<sup>4</sup> Las transformaciones descritas llevan a considerar que el concepto de burguesía rural no es suficiente para abarcar la diversidad de relaciones de propiedad y uso de la tierra, así como la amplitud de escala que involucra en este siglo a los sectores locales, nacionales e internacionales que comandan de forma amalgamada la comercialización y financiarización de la apropiación de la renta de la tierra (Oliveira, 2007 y 2015). La burguesía rural y las oligarquías, que mantienen aún ciertas relaciones coloniales, están subsumidas en el concepto de agronegocio. Sólo para citar un elemento de la complejidad que se pretende comprender, es posible constatar que conglomerados transnacionales del porte de Monsanto, Bayer, Bunge & Born, Cargill, Syngenta y Louis Dreyfus, por citar algunos, permean el modelo agrícola vigente en toda su extensión.

vinculados a la lucha por la tierra forman parte de la Vía Campesina<sup>5</sup> que coordina una diversidad de organizaciones diseminadas por el país. Además de las anteriores, desempeñan un papel importante la Confederación Nacional de los Trabajadores en la Agricultura (CONTAG), la Coordinadora Nacional de Articulación de Quilombos (CONAQ), la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), así como un gran número de importantes movimientos locales y regionales en lucha también por la agroecología.

Para el análisis de la dinámica de la lucha por la tierra y por la Reforma Agraria en las primeras décadas del presente siglo resaltaremos las políticas de Estado, los diferentes gobiernos y las formas organizativas y de conflicto que asume la lucha de clases, principalmente en el campo. Partimos de la premisa de una hegemonía neoliberal de las directrices estatales, considerando que, en la medida en que no se vislumbran rupturas, los gobiernos se ven presionados a lidiar con ellas, obligándolos a asumir una faz conservadora en la coyuntura de su intensificación.

### Primera década y media del siglo XXI

En las últimas dos décadas del siglo XX se abre en América Latina un proceso de redemocratización, que sigue al anterior periodo de sincronía de dictaduras cívico-militares coordinada por los intereses estadounidenses. Luego de incesantes e intensas luchas, organizaciones de trabajadores, campesinos y, aunque todavía de forma incipiente, de indígenas y quilombolas, buscaron bajo la forma de sindicatos, centrales sindicales y movimientos sociales, retomar las reivindicaciones que fueron reprimidas y obstaculizadas por sucesivos gobiernos de excepción. La confluencia de todas estas luchas condujo en Brasil a la realización de una Asamblea Constituyente que reconoce un amplio conjunto de derechos sociales mismos que poco después, bajo la ofensiva neoliberal, serán cuestionados y frecuentemente ignorados. En el caso de la lucha por la tierra, se reconocen los derechos de los pueblos tradicionales, indígenas y quilombolas, y se consagra una concepción de Reforma Agraria que considera que tierras improductivas, así como aquéllas donde se haya utilizado mano de obra análoga a la esclava para producir, debían ser repartidas para efectos de una Reforma Agraria entre los pueblos del campo. Al mismo tiempo, en esa misma reformulación constitucional se reafirma el carácter “productivista” persistente en los discursos de

<sup>5</sup> Esa organización internacional en Brasil también congrega al *Movimento dos Atingidos por Barragens* (MBA), al *Movimento dos Pequenos Agricultores* (MPA), al *Movimento de Mulheres Camponesas* (MMC), a la *Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil* (FEAB), a la *Comissão Pastoral da Terra* (CPT), al *Pastoral da Juventude Rural* (PJR), a la *Associação Brasileira dos Estudantes de Engenharia Florestal* (ABEEF), al *Conselho Indigenista Missionário* (CIMI) y a *Pescadores e Pescadoras Artesanais*.

las clases dominantes en el campo y fuertemente criticado por los movimientos sociales (Medeiros, 2015).

Es necesario destacar que a partir de la última década del siglo pasado, los gobiernos brasileños buscaron insistentemente hacer que el Estado llevara a cabo una política adepta al Consenso de Washington, privatizando empresas estatales –que ofrecían servicios subsidiados y asistencia social a la población–, así como intentando flexibilizar la legislación laboral y subsidiar a los grandes empresarios con recursos estatales.<sup>6</sup> Al mismo tiempo, desde principios de la década de los noventa, las centrales sindicales, los partidos y los movimientos sociales se opusieron enérgicamente a aquellos gobiernos, conteniendo el avance de tales políticas. En el último lustro del siglo se registraron huelgas nacionales de diversos sectores de servicios (bancarios y correos), así como de empleados públicos (profesores y del ámbito judicial), incluso ocupaciones de refinerías por parte del sindicato de petroleros que se oponía a la privatización y a la precarización de las relaciones de trabajo. Las luchas campesinas, quilombolas e indígenas –mediante diversas formas de enfrentamiento, sobre todo ocupaciones– conquistaron asentamientos y demarcaciones de tierras, siempre acosadas por la violencia estatal o la perpetrada impunemente por los terratenientes. La masacre de Eldorado de Carajás en abril de 1996, donde 19 trabajadores sin tierra fueron asesinados por la policía del Estado de Pará, representó un hito cuya repercusión obligó al gobierno a prestar mayor atención y a reconocer las demandas de los movimientos campesinos (Mendes Pereira y Alentejano, 2018).

La violación a los derechos de los trabajadores se realizó básicamente bajo los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), lo que desató una importante reacción social que se manifestó en las elecciones de 2002. En esa ocasión, en medio de una intensa campaña mediática, el candidato por el Partido de los Trabajadores (PT) construye una alianza con el Partido Liberal y difunde una Carta a los Brasileños en la que se compromete a no interferir en el proceso de financiarización ni en reformas que pudiesen provocar conflictos intensos. El gobierno del Frente Brasil Popular (FBP), encabezado por el PT, se caracteriza desde 2003 por un amplio espectro de fuerzas conciliadoras que incluye desde centrales sindicales y movimientos sociales campesinos hasta las élites tradicionales, entre las que destaca la élite agraria (Sauer, 2017). La composición del gobierno del Frente Brasil Popular –tanto la alta burocracia

<sup>6</sup> Un ejemplo ilustrativo de esas políticas es la promulgación, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en 1996, de la Ley Complementaria No. 87 –también denominada Ley Kandir– que exenta del pago de impuestos sobre circulación de mercancías y servicios (ICMS) a productos primarios, industriales semielaborados y servicios exportados. Esa medida amplía el margen de ganancias de las empresas agropecuarias y mineras, compromete la recaudación del fondo público –recayendo con mayor incidencia en los trabajadores– y aumenta el carácter regresivo de la distribución del ingreso.

estatal como los diversos cargos del Poder Ejecutivo e instituciones relacionadas-, lo que podría denominarse como la “clase reinante” a partir de la teorización de Poulantzas (1970), provenía de las centrales sindicales y de los movimientos sociales que no sólo apoyaron al gobierno, sino que incluso propusieron dirigentes o formaron parte de él. Tal situación permite imaginar las expectativas que las organizaciones de los trabajadores del campo y de la ciudad se crearon de los gobiernos del Frente Brasil Popular. Para una parte considerable de las organizaciones de los trabajadores (partidos de izquierda y centro izquierda, centrales sindicales y movimientos sociales), desde un principio, el mandato de Luiz Inácio Lula da Silva debió ser objeto de disputa continua con los sectores burgueses en su interior –con la esperanza de éxito en el seno del Estado burgués. La visión que parece haber orientado la relación de los movimientos sindicales y sociales sugiere considerar al Estado y su gobierno con tal maleabilidad que bien pudo asimilar y responder a las demandas sin provocar conflictos ni rupturas con el orden vigente (Mendes Pereira y Alentejano, 2018; Singer, 2012).

La pugna por el proyecto de gobierno y de Estado que los movimientos sociales y sindicales esperaban llevar adelante es desafiada desde un principio, al verificarse, entre tantos otros elementos, el elevado nivel de institucionalización a través de cual sus reivindicaciones fueron gestionadas y la sistemática aproximación de las políticas gubernamentales a los intereses de las clases dominantes. Ejemplos cabales de esa dinámica son los episodios que se hicieron públicos en torno a la compra de votos en el Parlamento para la aprobación de leyes propuestas por el Ejecutivo (denominado *mensalão 2*<sup>7</sup>), entre 2005 y 2006. En 2007, el presidente Lula, en un discurso mediático, califica a los dueños de ingenios azucareros como “héroes”, siendo que este sector es de los más detestados por los trabajadores rurales de la caña de azúcar, debido a la intensa explotación y al uso histórico de la violencia, que se remonta al periodo colonial; al mismo tiempo, este sector es de los más privilegiados beneficiándose de subsidios y préstamos del gobierno nacional.

El slogan de un “gobierno de todos” bajo los periodos de Lula se materializa institucionalmente con la creación de un Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) controlado por el agronegocio y los latifundistas, y el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), dirigido a políticas para los pequeños agricultores y campesinos. Esa arquitectura estatal se desplegará en políticas rurales, logrando algunos avances en la atención de las reivindicaciones de los campesinos, indígenas y quilombolas, así como de medianos y grandes agricultores. Lo central aquí es analizar cómo se benefició cada uno de estos sectores respecto de los otros por parte del gobierno (Sauer y Mészáros, 2017).

<sup>7</sup> Puede ser traducido como “la mensualidad”.

Durante los primeros años del gobierno de Lula fueron elaboradas e implementadas diversas políticas estatales con mayor cobertura e inversión presupuestaria que en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, las cuales tuvieron resultados disímiles. Para entender esa afirmación es necesario que se consideren las dimensiones continentales del Estado brasileño, pues las políticas llegaron con desigual intensidad, ya sea por la propia debilidad del aparato estatal, o por las dificultades que los movimientos sociales tuvieron para organizar el acceso a las mismas. A propósito de esto, también puede ser considerada la demarcación de tierras indígenas, el reconocimiento y la adjudicación de territorios quilombolas y la legalización de asentamientos de sin tierras y ocupantes, que aun cuando hayan sido ligeramente superiores al gobierno anterior, en general han sido inferiores a las demandas de los movimientos sociales. También cuenta en esa disparidad, no obstante que fue positiva para los pueblos del campo, una serie de políticas públicas para pequeños y medianos campesinos, entre las que podemos destacar: el financiamiento con intereses subsidiados (como el Programa Nacional de Agricultura Familiar –PRONAF) y las políticas que permitieron una normalización de la producción agrícola, teniendo la certeza de que tal producción se comercializaría, como el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) y el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE). Aunque ese conjunto de políticas públicas tuvo un impacto desigual en el amplio territorio brasileño, desempeñó un importante papel en la integración del medio rural con el urbano (Delgado y Leite, 2011). El reconocimiento del gobierno de Lula como interlocutores legítimos a los movimientos sociales campesinos contribuyó decisivamente a la elaboración de políticas estatales próximas a sus reivindicaciones.<sup>8</sup>

En el caso de los grandes productores, es decir los grandes terratenientes, el significativo volumen de créditos subsidiados (entre los que destaca el Plan Cosecha –*Plano Safra*) y la disponibilidad de una variada gama de obras públicas de infraestructura (puertos, carreteras, etcétera) propiciaron el fortalecimiento económico y político del agronegocio enarbolando un discurso de propulsor de un modelo de desarrollo. Para ilustrar la desigualdad señalada podemos recurrir a los datos oficiales del MDA y del MAPA para el financiamiento de la cosecha de 2009-2010, cuyos recursos disponibles para la agricultura familiar fueron de R\$ 15 mil millones, mientras que el agronegocio dispuso de R\$ 92,5 mil millones. Cabe señalar que esa proporción se mantuvo, en líneas generales, durante los años posteriores.

Al final de los gobiernos de Lula es posible percibir una mayor proximidad con los sectores vinculados al agronegocio (Sauer, 2017). Esa situación está relacionada con

<sup>8</sup> Las consecuencias e intensidad de esa relación entre el Estado y los movimientos sociales en el periodo señalado demandan un estudio específico. Es posible identificar desde casos de estrecha “cooperación” (Penna, 2015), hasta casos de ocupación de cargos en la burocracia. La incorporación y/o apoyo al gobierno puede redundar en la posible reducción de la conflictividad de los movimientos sociales del campo (Carlos, 2017), aunque esa afirmación carece de investigaciones sustentables.



la creciente importancia que las *commodities* van adquiriendo en la gama de productos de exportación nacional, principalmente por el aumento de la capacidad de compra de China en la primera década de este siglo. Esta situación tomará proporciones particulares después de la crisis financiera mundial de 2008, que tendrá como consecuencia una lenta caída en la disponibilidad de recursos para la implementación de políticas estatales de distribución del ingreso que asumirán un carácter eminentemente residual. El contexto de aumento de ingreso de la población –a partir de la reducción significativa del desempleo y de los aumentos salariales– que redundó en un fortalecimiento del consumo, mayor acceso a las políticas estatales, implementación de diversos mecanismos fiscales y financieros de fomento del sector privado, así como otros elementos macroeconómicos y de política exterior, han llevado a caracterizar a ese periodo como neodesarrollista.<sup>9</sup> El protagonismo estatal que durante este periodo pretendió diferenciarlo de las directrices neoliberales no consiguió ocultar el fortalecimiento de los sectores empresariales y financieros, lo cual en una sociedad desigual tiende inevitablemente al aumento de la polarización.

Durante los gobiernos de Lula, las movilizaciones de los trabajadores del campo y de la ciudad no mostraron la intensidad del periodo anterior. Algunas de las razones apuntan a la proximidad de los movimientos sindicales y sociales, así como al simple hecho de haber sido un gobierno encabezado por el principal partido de izquierda que los trabajadores construyeron en Brasil y que el arco de alianzas contemplara a la mayoría de los partidos de izquierda. También en ese periodo hubo importantes aumentos de salarios y se redujo sensiblemente el desempleo, al mismo tiempo que el acceso al crédito de bancos estatales repercutió en el fortalecimiento del mercado interno –lo cual estimuló el crecimiento de la construcción civil y de la industria automovilística, por ejemplo. No obstante, en el campo, los trabajadores rurales asalariados mantuvieron elevados índices de informalidad y precariedad laboral, como indica el estudio del Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Económicos (DIEESE, 2014). Es necesario señalar que no dejaron de haber huelgas u ocupaciones de tierras, por ejemplo, aunque no tuvieron la dimensión del periodo anterior. Los elementos citados –que junto con otros conlleva a caracterizarlo como neodesarrollista– pueden obnubilar las increíbles ganancias que el sector financiero acumuló y el avance de rasgos característicos de las políticas neoliberales tales como las denominadas “reformas” a la ley de jubilaciones y pensiones y la flexibilización de leyes laborales y de organización sindical (Marinoni y Medeiros, 2017; Singer, 2012; Singer y Loureiro, 2016).

Por otro lado, es indispensable subrayar que la legitimidad popular que el gobierno de Lula mantuvo en sus dos mandatos no condujo a modificar los fundamentos de la

<sup>9</sup> El intenso debate en torno del neodesarrollismo, su viabilidad (Sicsú, Paula y Michel, 2007) y limitaciones (Prado y Meireles, 2010), así como los requisitos para su éxito, demandan un análisis que supera los objetivos de este estudio.



distribución de la riqueza, principalmente en el campo, ya que la concentración de la tierra no sufrió transformaciones substanciales (Fernandes, 2017). Para ilustrar esta última afirmación es posible observar en el cuadro 1 que 85% de los pequeños propietarios ostentan 16% de las tierras productivas, siendo que 2% de los latifundistas continuaron como dueños de más de la mitad de ellas, de acuerdo con el Instituto de Colonización y Reforma Agraria (INCRA).

**Cuadro 1**  
**Estructura de la propiedad de la tierra en Brasil**

<i>Dimensión de las propiedades (hectáreas)</i>	<i>Propiedades</i>			
	<i>N de registros</i>	<i>%</i>	<i>Área total</i>	<i>%</i>
1 a 10	1.200.939	31	6.129.827	1
10 a 100	2.704.184	54	68.051.497	15
100 a 1.000	533.741	13	147.075.510	32
1.000 a 10.000	61.135	1,6	151.607.930	33
10.000 a 100.000	1.517	0,4	34.844.120	7
Más de 100.000	155	-	56.565.422	12
<b>Total</b>	<b>4.501.671</b>	<b>100</b>	<b>464.274.306</b>	<b>100</b>

Notas: a) Existen más de 266 mil registros de propiedades que no fueron consideradas por el INCRA, pero que controlan tierras; b) El total general de propiedades registradas es de 5.498.505, que abarcan 605.387.746 hectáreas.

Fuente: INCRA (2012).

Ya bajo el periodo de Dilma Rousseff, los efectos de la crisis financiera mundial de 2008 comienzan a manifestarse, al mismo tiempo que, en nombre de la gobernabilidad, los sectores vinculados al agronegocio van ganando espacio en el gobierno. Los movimientos sociales, así como los sindicales, van paulatinamente dejando de ser interlocutores directos del gobierno petista. La situación se complica más para los trabajadores al inicio del segundo mandato, cuando Rousseff intenta realizar un ajuste fiscal nombrando a un representante de los banqueros como Ministro de Economía<sup>10</sup> y a la representante del agronegocio, Kátia Abreu (presidenta de la Confederación Nacional de la Agricultura), como Ministra de Agropecuaria, Pesca y Abastecimiento. El distanciamiento que el gobierno de Rousseff genera con las

<sup>10</sup> Nos referimos a Joaquim Levy, quien por un año tuvo carta blanca para articular en el Parlamento las medidas prescritas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, sin el éxito esperado por éstos. Su larga carrera por varios cargos estatales y bancos privados de peso en Brasil lo ha convertido, al salir del gobierno Rousseff, en Director-General y Director Financiero del Grupo Banco Mundial.

organizaciones sociales campesinas puede ser observado a partir de la disminución de las expropiaciones para la creación de asentamientos campesinos,<sup>11</sup> los pocos casos de demarcación de tierras indígenas y de reconocimiento de territorios quilombolas. Simultáneamente, se verifica un gradual desmantelamiento de las instituciones gubernamentales encargadas de implementar las políticas para esos sectores, entre ellas, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) y la Fundación Nacional del Indio (FUNAI). En ese periodo también se introdujeron cambios en las leyes ambientales que favorecieron los intereses del agronegocio –en particular de los latifundistas–, entre otros la reforma al Código Forestal en 2012.

Las manifestaciones multitudinarias que se esparcieron por todo Brasil a mediados de 2013 pueden ser consideradas un punto de inflexión en esa relación del gobierno con los movimientos sociales (Maricato *et al.*, 2013). La represión a las manifestaciones callejeras aumenta, así como la criminalización del activismo en el campo. Quizás una de las medidas emblemáticas de esa dinámica de distanciamiento de los movimientos sindicales y sociales sea la promulgación de una Ley Antiterrorismo en los estertores del gobierno de Rousseff, teniendo en cuenta que su dudosa interpretación puede legitimar la “neutralización” de los luchadores sociales. El gradual distanciamiento de la base popular que llevó al gobierno al Partido de los Trabajadores, junto con las dificultades para implementar a fondo las políticas determinadas heterónomamente (Mendes Pereira, 2016), prepararon el camino para que el complejo jurídico-legislativo-mediático –protector de los intereses del agronegocio, el sistema financiero y de los empresarios industriales– construyera la oportunidad para derrocar al gobierno de Dilma Rousseff.

A pesar de que en el análisis crítico que hemos realizado sostenemos que los gobiernos del PT no atendieron las demandas de los movimientos sociales en su conjunto, la mayor parte de ellos continúa reivindicando que fueron los que más realizaron en este sentido. Al mismo tiempo, la frustración de las expectativas creadas por los movimientos sociales de lucha por la tierra con los gobiernos petistas ha traído como consecuencia la reducción en la diversidad de organizaciones, debilitándose con ello la pugna por la Reforma Agraria (Fernandes, 2017; Medeiros, 2015). La persistencia de la violencia contra los movimientos sociales campesinos es un factor que se vincula a esa situación (CPT, 2017).

<sup>11</sup> Esa dinámica puede ser apreciada en Fernandes (2017), así como también números que apuntan en la misma dirección al observar la cantidad de campamentos organizados por los movimientos del campo para presionar por expropiaciones de tierras. Inclusive, la información del INCRA, cuestionada por el MST y otros movimientos sociales, indica que las expropiaciones para el asentamiento de campesinos durante el gobierno de Rousseff fueron muy inferiores a las realizadas por el gobierno de Cardoso.

## El Golpe y sus políticas

La deposición de la presidenta Dilma Rousseff, en medio de un gran show mediático, dejó al descubierto a personajes relegados del juego oligárquico y conservador, con el protagonismo expuesto de los poderes judicial y legislativo; al mismo tiempo que los sectores sociales fueron tímidamente convocados para defender su mandato, privilegiando una vez más el marco institucional. El juicio político fue más bien a las modestas y frágiles reformas realizadas en el periodo petista, así como a la demora en implementar las profundas políticas neoliberales que la agenda heterónoma demandaba. En ese sentido, no se puede negar que el gobierno de Rousseff haya intentado –desde su asunción– implementar la agenda neoliberal, de manera que puede decirse que el gobierno de Michel Temer dio continuidad y coherencia a dichas políticas diferenciándose, ciertamente, en la intensidad y amplitud con que éstas se despliegan bajo su gobierno. Al mismo tiempo, es un golpe institucionalizado, civil, pues el gobierno que resulta de él implementa las políticas que fueron derrotadas en las elecciones; también en la medida que se echó mano de argumentos falsos para lograr la destitución, a partir de la confluencia mediática, la saña oligárquica y neoliberal de los diputados y senadores, y el beneplácito de amplios sectores del Poder Judicial (Jinkings, Doria y Cleto, 2016).

Es recurrente en la historia republicana brasileña que las contiendas por el poder se resuelvan por golpes de Estado, artificio eficaz para la perpetuación de políticas autocráticas y de reproducción de las desigualdades sociales. Las oligarquías agrarias garantizaron el golpe en el Poder Legislativo. La bancada de extracción rural electa junto con el gobierno de Dilma está compuesta por 214 de 513 diputados y por 22 de 81 senadores, organizados en el Frente Parlamentario Mixto de la Agropecuaria (FPMA). Junto con otros sectores corporativos-industriales y religiosos, representan la continuidad oligárquica de un Brasil que niega el genocidio de los pueblos indígenas, defiende la esclavitud formalmente abolida hace poco más de un siglo, y una Ley de Tierras que data de 1850 que imposibilitó a pobres y negros tener acceso a ella (Bragon, 2017; Teixeira, 2017).

Las contra-reformas que no pudieron realizarse en el periodo anterior se aceleran en el gobierno de Temer. Una de sus primeras medidas fue el desmantelamiento del Ministerio de Desarrollo Agrario, cerrando con ello el espacio de interlocución con las organizaciones campesinas y tradicionales. Los derechos conquistados con intensas luchas en las más variadas áreas son borrados con decretos-ley dictados autocráticamente desde el Poder Ejecutivo (en Brasil se denominan Medidas Provisorias). Las políticas del gobierno ilegítimo están orientadas a favorecer principalmente a tres sectores: el sistema financiero, el complejo del agronegocio y las empresas transnacionales. En el caso específico de la disputa por la tierra, el complejo del

agronegocio organiza en su entorno las finanzas y las transnacionales que lo componen estructuralmente.

En general, las políticas públicas implementadas en el periodo anterior están sufriendo recortes presupuestales que comprometen su permanencia a corto y largo plazos. Esa situación se aplica, por ejemplo, a los asentamientos campesinos, para los cuales la reducción de las posibilidades de financiamiento cayó casi 90% en el transcurso de 2017. Asimismo, en el área de la educación pública en las áreas rurales, prácticamente se extinguió el financiamiento para la educación del campo a nivel de licenciatura. Es digno de mención el hecho de que desde los gobiernos de Rousseff, la enseñanza básica y media haya venido perdiendo escuelas rurales en una proporción significativa. En lo referente a las jubilaciones y pensiones, las profundas reformas pretenden aumentar significativamente la edad mínima para su acceso, a tal punto que prácticamente impedirá ese derecho a los trabajadores y trabajadoras rurales.

La fuerza parlamentaria conservadora –aglutinada en el Frente Parlamentario Mixto de la Agropecuaria (FPMA)– ha venido desechando sistemáticamente las principales conquistas sociales de la Constitución de 1988, contando con la connivencia de las instituciones judiciales, favorables a la manutención del gobierno de Temer. Entre estas medidas gubernamentales pueden destacarse las que fomentan –al punto de legalizar– las relaciones de trabajo análogas a relaciones de trabajo esclavistas; la implementación de los cambios en el Código Forestal, que exentan de sanción al agronegocio por la deforestación y la explotación de áreas de preservación; la reducción del área de la Amazonia Legal, aumentando la cantidad de tierras disponibles para las actividades agropecuarias; la regularización de tierras apropiadas ilegalmente –denominada por *grilagem*– por parte de los latifundistas; la pretensión de que sea exclusivamente el Congreso Nacional –y ya no las instituciones estatales (FUNAI)– quien decida la demarcación de tierras indígenas, así como las que están en trámite, lo que podría anular la concesión de tierras a las comunidades quilombolas. Estas últimas medidas amenazan con suspender la distribución de tierras a las comunidades tradicionales y campesinas.

Bajo la idea que busca asociar el agronegocio con el desarrollo y la modernidad se esconden los intereses de sus mayores exponentes (incluyendo al propio Ministro de Agricultura del gobierno de Temer) junto con la corrupción, la apropiación ilegal de tierras, la utilización intensiva de agro-tóxicos y el sistemático uso de la violencia en el campo. Asimismo, el perfil emprendedor del que se hace tanto alarde oculta el financiamiento ostensivo que el Estado brinda anualmente –que llega a R\$200 mil millones (aproximadamente 63 mil millones de dólares)– a través del Sistema Nacional de Crédito Rural.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Alrededor de 10% de ese monto sigue siendo destinado a los pequeños agricultores, a través del Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF).

El amplio y sombrío espectro de los retrocesos que ha sufrido este sector en el corto e ilegítimo gobierno de Michel Temer revela una significativa transformación del rumbo de las políticas estatales ambientales, con repercusiones particularmente en el campo. Asistimos a una reforma de la legislación ambiental que deja de proteger –para beneficio de la ocupación de los terratenientes y con el beneplácito del agronegocio– áreas bióticas importantes del territorio brasileño, entre los que destaca la Amazonia, al abolir por decreto amplias regiones de preservación y hábitat de sociedades tradicionales (indígenas, quebradoras de coco y quilombolas, entre las más populosas) y campesinas. Esas mismas consecuencias sociales se están viviendo en una importante región del Cerrado –el acrónimo MATOPIBA se refiere a los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahia–, que comprende un amplio territorio en el norte y nordeste brasileño, con 73 millones de hectáreas que se convertirán en el nuevo Eldorado de los monocultivos del agronegocio. La disminución de áreas preservadas en cada propiedad individual y el desmantelamiento de los órganos fiscalizadores del cumplimiento de la legislación ambiental, laboral y agraria forman parte de un conjunto de políticas estatales que garantizan los intereses de los sectores primario-exportadores, así como la necesaria impunidad que implica su puesta en práctica.

Otro aspecto importante de las políticas del gobierno de Temer es su carácter marcadamente heterónomo, que se pone en evidencia no sólo con la privatización de empresas estatales en beneficio de empresas transnacionales. También la acelerada legalización del uso de agro-tóxicos –de propiedad exclusiva de transnacionales– frecuentemente prohibidos en sus países de origen, la autorización a extranjeros de adquirir tierras oficialmente, además de un sinnúmero de decisiones gubernamentales o jurídicas, muestran el alineamiento con los designios hegemónicos (Mendes Pereira y Alentejano, 2018).

Las comunidades indígenas y quilombolas son hostigadas haciendo una interpretación de la Constitución Federal denominada “marco temporal”, que consiste en que dichas comunidades sólo pueden reivindicar las tierras que ocupaban en el momento de la promulgación de la misma Constitución, negando los componentes históricos que otorgan significado a sus territorios y acotándolos a espacios reducidos. Esa lectura arbitraria y parcial de la legislación, antes de ser jurídicamente aceptada, ya está plasmada en una serie de políticas que estrangulan los presupuestos para esas comunidades y desmantelan instituciones estatales que podrían auxiliarlas consumándose con la persecución de sus activistas y simpatizantes. Una vez más, ese conjunto de medidas busca legitimar la preponderancia de los intereses latifundistas ante las demandas sociales en el campo. Esa situación tiene antecedentes en el gobierno de Rousseff, que presentó el menor porcentaje anual de legalizaciones de territorios indígenas desde el fin de la dictadura militar. Las comunidades indígenas y quilombolas enfrentan la ofensiva del modelo hegemónico de desarrollo, que promueve

un vertiginoso aumento de la deforestación, la expansión del agronegocio, la explotación maderera, mineral y petrolífera, así como los megaproyectos de infraestructura (como las hidroeléctricas amazónicas) (CIMI, 2017).

La robusta alianza de los sectores que realizaron el golpe en 2016 contra un gobierno electo, estuvo encabezada por los representantes del agronegocio y fue jubilosamente incentivada por los medios de comunicación de masas. La consumación de esa alianza de fuerzas reaccionarias repercute en el retroceso que se vive en el campo, con el aumento de las violaciones a los derechos humanos, el recrudecimiento de la represión en contra de las reivindicaciones territoriales indígenas, los campamentos de los sin-tierras y las organizaciones y derechos quilombolas.

La criminalización de las luchas y la violencia han venido aumentando desde 2016. La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), organización vinculada al Consejo Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), registra 61 asesinatos en conflictos por la tierra, siendo 13 indígenas, 4 quilombolas, 6 mujeres, 16 jóvenes de entre 15 y 29 años y un adolescente las víctimas (CPT, 2016). En el cuadro 2 se verifica su aumento en relación con el año anterior.

**Cuadro 2**  
**Violencia por conflictos por la tierra**

	2015	2016	%
Asesinatos	50	61	22
Tentativas de asesinato	59	74	25
Amenazas de muerte	144	200	39
Agredidos	187	571	206
Presos	80	228	185

*Fuente:* Comisión Pastoral de la Tierra (2016).

El reciente análisis del Comité Brasileño de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos (CBDDH) también registra datos de la violencia en Brasil, constatando que su principal causa está relacionada con los conflictos por la tierra. En el referido documento se verifica que en 2016 hubo un aumento en la ocurrencia en 90% de asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en los estados de Rondônia, Pará e Maranhão. Incluso agrega que ya para mediados de 2017 se habían registrado 42 asesinatos (CBDDH, 2017).

La generalización y el aumento de la violencia –que va desde amenazas, tortura hasta el asesinato– como forma “natural y legítima” de dominación en el campo se constituye en práctica de control de las comunidades tradicionales y campesinas, fortaleciendo

la concentración de tierras y alimentando la recurrente impunidad de quienes la practican. La criminalización de los movimientos sociales a partir de una lectura sesgada de la Ley de Organizaciones Criminales, de 2013, refuerza las posibilidades de recurrir a las fuerzas de seguridad de forma preventiva y ostensiva. Pueden ser empleadas, por ejemplo, en el contexto de los megaproyectos de infraestructura (hidroeléctricas, puertos, carreteras, entre otros) para aplacar protestas promovidas por indígenas, quilombolas, sin-tierras y la población vulnerable del campo. En el ámbito de esa ofensiva de criminalización y racismo institucional es necesario prestar atención a una serie de procesos en el ámbito nacional. Por ejemplo, es necesario resaltar el trabajo de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) en el Congreso Nacional brasileño sobre la FUNAI-INCRA (dos instituciones estatales creadas para atender los problemas del campo), cuyos funcionarios, simpatizantes, activistas y antropólogos están siendo perseguidos con amenazas, descalificación moral y arrestos arbitrarios, incentivados por acusaciones de empresas e instituciones estatales, inclusive con la activa participación de miembros del Poder Judicial.

Las acciones contra la población rural son frecuentes gracias a la hegemonía que tienen los intereses del agronegocio al interior del Estado. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) anunció que por motivos de cortes presupuestales tuvo que reducir el número de cuestionarios a ser aplicados para el Censo Agropecuario de 2017. La parte más perjudicada tiene que ver con la diversidad de la agricultura familiar, el uso de agro-tóxicos, el trabajo temporal, la auto identificación étnico-racial, entre otros. La falta de información oficial al respecto –fuente indispensable para la realización de estudios– dificultará la elaboración y ejecución de políticas para el sector, creando mayores obstáculos para el reconocimiento de la territorialización de las poblaciones tradicionales.

El freno a las políticas relacionadas con la Reforma Agraria es evidente con la suspensión, por parte de la Abogacía General de la Unión (AGU) –encargada de evaluar y analizar un sinnúmero de legislaciones que fundamentan las acciones estatales y los contratos relacionados con la asignación de propiedades a los asentados– de crear nuevos territorios para los sin-tierra. Existen 400 mil familias esperando la regularización de sus lotes, y con la demora se da una mayor exposición a la violencia y al recrudescimiento de la precarización de sus condiciones de vida. Esa selectividad social del gobierno de Temer tendrá repercusiones devastadoras en el futuro de la sociedad brasileña.

Más allá de la inmensa cantidad de funcionarios del gobierno con procesos judiciales por corrupción en curso y de las formas antidemocráticas y evidentemente parciales que orientan las decisiones oficiales, se constata la conculcación de derechos y una progresiva organización de la protesta social. En estos casi dos años del gobierno de Michel Temer, la agenda política empresarial y del agronegocio fueron avasalladoras



para el conjunto de la población. No satisfechos con legalizar su agenda plutocrática, también avanzaron en exentarse a niveles de miles de millones de Reales en el pago de impuestos, perdón de multas, deudas e intereses (Bragon *et al.*, 2017), acentuando la desigualdad en la composición del fondo público y en consecuencia su apropiación socialmente regresiva. El fortalecimiento del discurso neoconservador se da, en parte, gracias al elevado número de representantes políticos vinculados a iglesias cristianas que proliferaron en esta década; grupos religiosos que anteponen sus convicciones creacionistas a las pruebas y a las evidencias científicas sobre la evolución humana, lo que representa un intenso duelo epistemológico en la periferia del sistema. En el caso brasileño este periodo asume contornos particulares que propagan el resurgimiento de discursos que parecen resucitar de sarcófagos, que buscan negar la historia y el conocimiento científico y que muestran el resurgimiento de políticas estatales que conducen a una sociedad dualista (para ricos y para pobres de forma diferenciada), retrocediendo más de medio siglo con la reconfiguración de “los dos Brasiles” (Lambert, 1967).

### Consideraciones finales

El aluvión de ataques a los pueblos del campo se plantea en el contexto de un fortalecimiento a nivel nacional de los terratenientes vinculados al agronegocio, cuyos intereses son hegemónicos al interior del aparato estatal. Este escenario guarda estrecha relación con el creciente papel extractivo y primario-exportador atribuido a los países latinoamericanos en la actual división internacional del trabajo, en la cual Brasil está incluido.

Ese modelo de desarrollo heterónimo, extractivo y predador –materializado en la explotación petrolera y mineral, en la expansión del agronegocio de monocultivo y agro-tóxico, así como en la construcción de megaproyectos hidroeléctricos– ha impactado de manera casi irreversible a las comunidades indígenas, quilombolas, campesinas y de la floresta. A partir del gobierno de Temer verificamos un énfasis desenfundado de esas características que definitivamente intensifican las desigualdades sociales.

El Estado ha dejado en evidencia su papel protagónico como espacio de disputa para la implementación de políticas estatales que conduzcan a una Reforma Agraria, aunque para ello sea necesario modificar las relaciones de propiedad, lo cual exige transformaciones radicales, que a su vez implican estremecimientos intensos en el bloque del poder. En la periferia del sistema es posible observar que la lucha por acceder al poder representa la oportunidad, todavía efímera, de implementar políticas públicas que beneficien a los sectores subalternos de la población. Así, la lucha por el poder estatal se presenta como *locus* privilegiado para la construcción de la Reforma Agraria,

pues los diversos movimientos vienen demandando del Estado la realización de políticas que la hagan posible.

El asalto del poder por parte de sectores oligárquicos ha generado un intenso descontento, pues los ataques a las conquistas sociales no sólo han sido para los sectores campesinos rurales sino para el conjunto de los trabajadores, de tal modo que han afectado a la mayoría de la población brasileña. La huelga general de abril de 2017 –la primera bajo el gobierno de Temer– representó un ensayo de reacción necesaria para el cambio de rumbo. Los movimientos del campo han tenido diversas jornadas unitarias de lucha en el transcurso de 2017 para enfrentar esas políticas, las cuales han sido frecuentes y cada vez mejor coordinadas.

La lucha de los movimientos sociales del campo tiende a unificar sus vertientes campesinas, indígenas, quilombolas y la diversidad de comunidades en busca de transformar su relación con la naturaleza. El desafío en curso impone firmeza en la recuperación de la función social de la tierra para la producción de alimentos saludables para la sociedad, de acuerdo con la experiencia histórica de los trabajadores del campo, valorando sus culturas y formas de organización y demostrando que es posible vivir bien potencializando el plantío agroecológico.

### Bibliohemerografía

- ARCEO, Enrique (2006), “El fracaso de la reestructuración neoliberal en América Latina: estrategias de los sectores dominantes y alternativas populares”, en Eduardo M. BASUALDO y Enrique ARCEO, *Neoliberalismo y sectores dominantes: tendencias globales y experiencias nacionales*, Buenos Aires, CLACSO.
- BRAGON, R. *et al.* (2017), “Pautas de viés conservador avançam na gestão de Michel Temer”, en *Folha de São Paulo*, 24 de septiembre. Dirección URL: <<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/09/1921276-pautas-de-vies-conservador-avancam-na-gestao-de-michel-temer.shtml>>, [consulta: 1 de octubre de 2017].
- BRUNO, Regina (2016), “Desigualdade, agronegócio, agricultura familiar no Brasil”, en *Estudos Sociedade e Agricultura*, Brasil, vol. 24, núm. 1, abril.
- CARLOS, Euzeneia (2017), “Cooperação e conflito na relação movimentos sociais e Estado”, en *Política & Sociedade. Revista de Sociologia Política*, Florianópolis, vol. 16, núm. 35. Dirección URL: <<http://dx.doi.org/10.5007/2175-7984.2017v16n35p321>>.
- COMISSÃO PASTORAL DA TERRA (CPT) (2015), *Cadernos Conflitos no Campo. Período de 2001 a 2014*, Goiânia, CPT Nacional.
- COMISSÃO PASTORAL DA TERRA (CPT) (2016), *Cadernos Conflitos no Campo Brasil*, Goiânia, CPT Nacional.
- COMITÊ BRASILEIRO DE DEFENSORAS E DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS (2017), *Vidas em luta: criminalização e violência contra defensoras e defensores de direitos*

- humanos no Brasil*, organizado por Layza QUEIROZ SANTOS e Alice DE MARCHI PEREIRA DE SOUZA, Curitiba, Terra de Direitos.
- CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (CIMI) (2017), *Violência contra os Povos Indígenas no Brasil. Dados de 2016*, Relatório. Dirección URL: <www.cimi.org.br>, [consulta: 10 de octubre de 2017].
- DELGADO, N. G. y S. P. LEITE (2011), “Políticas de Desenvolvimento Territorial no Meio Rural Brasileiro: Novas Institucionalidades e Protagonismo dos Atores”, en *DADOS. Revista de Ciências Sociais*, Rio de Janeiro, vol. 54, núm. 2.
- DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos) (2014), “O mercado de trabalho assalariado rural brasileiro”, en *Estudos e Pesquisas*, núm. 74.
- FERNANDES MANÇANO, Bernardo *et al.* (2017), “A questão agrária na segunda fase neoliberal no Brasil”, en *Boletim Dataluta*, UNESP Campus Presidente Prudente, Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária (NERA).
- HARVEY, David (2008), *O neoliberalismo: história e implicações*, São Paulo, Loyola.
- JESSOP, Bob (2015), *The State. Past, present, future*, Cambridge, United Kingdom, Polity Press.
- JINKINGS, Ivana, Kim DORIA y Murilo CLETO (organizadores) (2016), *Por que gritamos golpe? Para entender o impeachment e a crise política no Brasil*, São Paulo, Boitempo.
- LAMBERT, Jacques (1967), *Os dois Brasis*, São Paulo, Companhia Editora Nacional.
- MARICATO, Ermínia *et al.* (2013), *Cidades rebeldes*, São Paulo, Boitempo.
- MARINGONI, Gilberto y Juliano MEDEIROS (organizadores) (2017), *Cinco mil dias: o Brasil na era do lulismo*, São Paulo, Boitempo.
- MARTINS, Carlos Eduardo (2017), “El Sistema-Mundo capitalista y los nuevos alineamientos geopolíticos en el siglo XXI. Una visión prospectiva”, en Marco A. GANDÁSEGUI hijo, *Estados Unidos y la nueva correlación de fuerzas internacional*, México, Siglo XXI/CLACSO.
- MARTINS DE SOUZA, José (1981), *Os camponeses e a política no Brasil*, Petrópolis, Editora Vozes.
- MEDEIROS, Leonilde (2015), “Luta por Reforma Agrária no Brasil contemporâneo: entre continuidades e novas questões”, en Cátia GRISA y Sergio SCHNEIDER (coordinadores), *Políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil*, Porto Alegre, Editora da UFRGS.
- MENDES PEREIRA, João Márcio (2016), “Modernização, combate à pobreza e mercado de terras. Uma análise das políticas do Banco Mundial para agricultura e desenvolvimento rural (1944-2003)”, en *Varia História*, Belo Horizonte, vol. 32, núm. 58. Dirección URL: <http://dx.doi.org/10.1590/0104-8775201600100010>.
- MENDES PEREIRA, João Márcio & Paulo ALENTEJANO (2018), “Brazil: class struggle in the countryside”, en James PETRAS & Henry VELTMAYER, *The class struggle in Latin America: making history today*, New York, Routledge.

- OLIVEIRA DE UMBELINO, Areovaldo (2007), *Modo de produção capitalista, agricultura e Reforma Agrária*, São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras y Ciências Humanas, Universidade de São Paulo.
- OLIVEIRA DE UMBELINO, Areovaldo (2015), “A mundialização do capital e a crise do neoliberalismo: o lugar mundial da agricultura brasileira”, en *Geosp. Espaço e Tempo*, vol. 19, núm. 2.
- PENNA, Camila (2015), “A relação de parceria entre o INCRA e os movimentos sociais no processo de implementação das políticas de Reforma Agrária”, en *Interseções*, Río de Janeiro, vol. 17, núm. 1. Dirección URL: <<http://dx.doi.org/10.12957/irei.2015.18052>>.
- POULANTZAS, Nicos (1970), *Poder político y clases sociales en el Estado capitalista*, México, Siglo XXI.
- PRADO, Fernando & Monika MEIRELES (2010), “Teoria marxista da dependência revisitada: elementos para a crítica ao novo-desenvolvimentismo dos atuais governos de centro-esquerda latino-americanos”, en Rodrigo CASTELO (organizador), *Encruzilhadas da América Latina no século XXI*, Río de Janeiro, Pão e Rosas.
- PUELLO-SOCARRÁS, José F. & María Angélica GUNTURIZ (2013), “¿Social-neoliberalismo? Organismos multilaterales, crisis global y programas de transferencia monetaria condicionada”, en *Política y Cultura*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, núm. 40.
- SAUER, Sérgio y George MÉSZÁROS (2017), “The political economy of land struggle in Brazil under Workers’ Party governments”, en *Journal of Agrarian Change*, núm. 17, Dirección URL: <<https://doi.org/10.1111/joac.12206>>.
- SAUER, Sérgio (2017), “Rural Brazil during the Lula administrations: Agreements with agribusiness and disputes in agrarian policies”, en *Latin American Perspectives*, vol. XX, núm. XXX, January. Dirección URL: <<https://doi.org/10.1177/0094582X16685176>>.
- SICSÚ, João, Luís Fernando PAULA & Renaut MICHEL (2007), “Por que novo-desenvolvimentismo?”, en *Revista de Economia Política*, vol. 27, núm. 4.
- SINGER, André (2012), *Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador*, São Paulo, Companhia das Letras.
- SINGER, André e Isabel LOUREIRO (organizadores) (2016), *As contradições do lulismo: a que ponto chegamos?*, São Paulo, Boitempo.
- TEIXEIRA, Gerson (2017), “O golpe e a Reforma Agrária”, en *Folha de São Paulo, Painei*, 26 de enero. Dirección URL: <<http://www1.folha.uol.com.br/opinioao/2017/01/1853085-golpe-e-reforma-agraria.shtml>>, [consulta: 10 de mayo de 2017].

Recibido: 15 de noviembre de 2017

Aprobado: 15 de marzo de 2018